



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

EXPEDIENTE: 3181/2019
TERCERA SALA UNITARIA

ACTOR: [REDACTED]

DEMANDADOS: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO
DE ZAPOPAN, JALISCO

SECRETARÍA DE LA HACIENDA
PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

JEFE DE LA OFICINA DE
RECAUDACIÓN FISCAL
METROPOLITANA NÚMERO 125, ASÍ
COMO DEL NOTIFICADOR Y
EJECUTOR FISCAL, ADSCRITOS A
LA CITADA OFICINA,
DEPENDIENTES DE LA
SECRETARÍA DE LA HACIENDA
PÚBLICA

LOS AGENTES NÚMEROS 72 Y 203,
ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE
MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN,
JALISCO

MAGISTRADO: JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL

SECRETARIO: JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS GAYTÁN

Guadalajara, Jalisco, 31 treinta y uno de agosto de 2020 dos mil veinte.

V I S T O S para resolver en **Sentencia Definitiva** los autos del Juicio Administrativo cuyo número de expediente se indica al rubro, promovido por [REDACTED] en contra de la **DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, JEFE DE LA OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL METROPOLITANA NÚMERO 125, así como del NOTIFICADOR Y EJECUTOR FISCAL, ADSCRITOS A LA CITADA OFICINA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA,** al igual que los **AGENTES NÚMEROS 72 Y 203, ADSCRITOS A**

LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE
ZAPOPAN, JALISCO, y;

R E S U L T A N D O

1. Mediante escrito presentado el 12 doce de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, a través de la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, suscrito [REDACTED] por su propio derecho promovió Juicio en Materia Administrativa, por los motivos y conceptos que del mismo se desprendieron.

2. Por auto de 20 veinte de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, se admitió la demanda, teniéndose como autoridades demandadas a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan y la Secretaría de la Hacienda Pública; y como actos administrativos impugnado las cédulas de notificación de infracción folios **2032509201838186** y **17213032018004401**, emitidas por personal adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, al igual el cobro del **refrendo** anual de circulación y holograma respecto del ejercicio fiscal **2019** dos mil diecinueve, con sus respectivas multas, recargos y gastos de ejecución, determinados por personal de la Secretaría de la Hacienda Pública.

Por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, se admitieron las pruebas ofrecidas, teniéndose por desahogadas las documentales, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió.

Con las copias simples del escrito inicial de demanda y de los documentos anexos a la misma se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación produjeran contestación a la demanda, ofrecieran y exhibieran pruebas con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se les tendrían como ciertos los hechos que no fueran contestados salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados y se les declararía por perdido el derecho a rendir pruebas.

También se requirió a las demandadas para que al momento de producir contestación a la demanda, exhibieran copias certificadas de los actos controvertidos, apercibidas que en caso de no hacerlo así, se les aplicaría cualquiera de las medidas de apremio de las previstas en el artículo 10, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

de Jalisco; sin perjuicio de tener por ciertos los hechos que la parte actora pretende acreditar con esos documentos.

En ese orden de ideas se tuvo al representante legal de la Secretaría de la Hacienda Pública, así como al Síndico Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, exhibiendo las copias certificadas de la Imposición de Multa y Requerimiento del pago del Derecho de Refrendo anual de Tarjeta de Circulación folio **M419004084657**, con su respectiva acta circunstanciada de notificación, así como de las actas de notificación de infracción folios **4401**, relativa al folio **17213032018004401** y **038186** relativa al folio **2032509201838186**; actos que fueron emitidos por el Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Metropolitana número 125, así como por el Notificador y Ejecutor Fiscal, adscritos a la citada oficina, dependientes de la Secretaría de la Hacienda Pública y Agentes números 72 y 203, adscritos a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan a quienes de conformidad a lo previsto en el artículo 3, fracción II, inciso a), de la Ley de la materia, se les designó como **nuevas autoridades demandadas**; en virtud de lo anterior, se le concedió al demandante el término de 10 diez días, para que ampliara su demanda, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le declararía por perdido ese derecho y esta Sala determinaría lo que en derecho correspondiera.

La ampliación que se tiene formulando en actuación de 12 doce de febrero de 2020 dos mil veinte, respecto del acto exhibido por la Secretaría de la Hacienda Pública, por lo que se ordenó correr traslado a las nuevas autoridades que se tiene como demandada para que produjeran contestación a la ampliación de demanda formulada en su contra, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo así, se les tendrían como ciertos los hechos que no fueran contestados, salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados, así mismo se le declararía por perdido el derecho a rendir pruebas.

4. Luego, el 3 tres de agosto de 2020 dos mil veinte se tuvo a la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, produciendo contestación a la ampliación de demanda formulada en contra del Jefe de la Oficina de recaudación fiscal metropolitana número 125, así como por el notificador y ejecutor fiscal, adscritos a la citada oficina, dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública, por opuestas las excepciones y defensas que de sus escritos se desprendieron, se admitieron las pruebas ofrecidas por no ser contrarias a la moral ni al derecho, teniéndose por desahogadas en virtud de que la naturaleza de las mismas así lo permitió.

Por lo anterior y en razón de que las pruebas admitidas, se habían desahogado en su totalidad, y que lo controvertido involucra cuestiones puramente de

derecho, se otorgó a las partes un término común de tres días a fin de que formularan alegatos, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo así, se les tendría por perdido el derecho en ese sentido y se turnarían los autos para que se dictara la sentencia definitiva que en derecho correspondiera.

5. Sin que al efecto las partes hubieran comparecido a expresar alegatos dentro del término que para tal efecto les fue concedido, en el último párrafo del acuerdo establecido en el punto que antecede, en consecuencia se les hacen efectivos los apercibimientos contenidos en el párrafo que antecede y se les **declara** por perdido el derecho a rendir alegatos, ordenándose turnar los autos para que se dictara la Sentencia Definitiva que en derecho correspondiera, la cual hoy se pronuncia de conformidad a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I. Este Tribunal es competente para conocer y resolver la presente controversia con base en lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 3, 4, 5, 10 y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 74, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

II. La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentra debidamente acreditada en actuación con las documentales que obran agregadas a fojas 16, 28, 29, 36 y 37, a las que se les otorga valor probatorio pleno en los términos de los artículos 48¹, 57² y 58³ de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así

¹ Artículo 48. En los juicios a que se refiere esta ley será admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante absolución de posiciones, las que no tengan relación con los hechos controvertidos, las contrarias a la moral y al derecho; y las que no hayan sido ofrecidas ante la autoridad demandada en el procedimiento administrativo, salvo que en éste no se le hubiera dado oportunidad razonable de hacerlo. Las pruebas supervenientes podrán presentarse antes de citación para sentencia. En este caso, la Sala ordenará dar vista a la contraparte para que en el término de cinco días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose su admisión y valoración hasta la sentencia definitiva.

² Artículo 57. El ofrecimiento y desahogo de pruebas, salvo lo expresamente previsto en la presente ley, se regirá por las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

³ Artículo 58. La valoración de las pruebas se hará conforme a las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.



como en los diversos numerales 399⁴ y 400⁵ del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley Adjetiva de la Materia.

III. Según criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciera valer la parte accionante en su escrito inicial de demanda, toda vez que dicha omisión no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes; se sustenta lo anterior por analogía y para mayor claridad se transcribe la siguiente Jurisprudencia:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”(Novena Época.

⁴ Artículo 399.- Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación del colitigante, salvo siempre el derecho de éste para redarguirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos. En caso de inconformidad con el protocolo o archivo, los instrumentos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere la inconformidad.

⁵ Artículo 400.- Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde; y no podrán objetarse sino con otros posteriores de la misma especie, salvo el caso de simulación en el que se podrá hacer uso de cualquier otro medio de prueba.

Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI. Mayo de 2010. Tesis: 2a./J.58/2010. Página: 830).

IV. Antes de entrar al estudio de los conceptos de nulidad realizados por la parte actora, en primer término y por ser de orden público se estudian las causales de improcedencia, promovidas por el Subprocurador Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública, así como por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, quienes comparecieron en representación y sustitución de las autoridades demandadas – Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, hoy Secretaría de la Hacienda Pública y Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco-, en sus escritos de contestación de demanda recepcionados por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal el 6 seis y 10 diez de enero de 2020 dos mil veinte, previstas por el artículo 29, fracciones I y IX, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Jalisco, que refiere:

“Artículo 29.- Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos:

I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante o que se hayan consumado de un modo irreparable;

XI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.”

Refiere el representante legal de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, que se actualiza la diversa causal aducida, toda vez que, para comparecer al juicio administrativo el actor debe justificar que efectivamente el acto de autoridad del que se duele, le genera una afectación a su esfera o interés jurídico, según previene el artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Por otro parte, el representante legal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, que se actualiza la diversa causal aducida, que no procede el juicio en materia administrativa en contra de disposiciones normativas de carácter general por ser una disposición de orden público e interés social, emanada del Congreso, motivo por el cual, considera que deberá decretarse la improcedencia de la presente causa y por consiguiente el sobreseimiento del mismo.



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

Se **desestima** la causal de improcedencia aducida por la representante legal de la autoridad dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, en razón de que contrario a lo que alega la autoridad señalada, la parte accionante acompañó a su escrito inicial de demanda, la impresión de pantalla certificada de los datos del vehículo impugnado donde la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, hoy la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, en la se le reconoce el carácter de propietario del vehículo con placas de circulación [REDACTED], mismo automotor al que le fueron impuestas las cédulas de notificación de infracción impugnadas, por lo que se concluye que esta resulta suficiente para acreditar no solo su interés jurídico, sino también la afectación a su esfera patrimonial, en razón de que se le está imponiendo una sanción en cantidad líquida, sirviendo de apoyo la siguiente tesis que a la letra dice:

De igual manera se desestima la diversa causal de improcedencia invocada por la Secretaría de la Hacienda, en razón de que la parte actora exhibió la impresión de adeudo vehicular, relativo al automotor con placas de circulación [REDACTED], por medio de la página de internet que para tal efecto tiene implementado la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; del cual se advierte los actos administrativos consistentes en el refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma del ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve y, para mayor ilustración, se considera necesario citar el contenido del artículo 1, segundo párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el cual establece lo siguiente:

*“**Artículo 1.** El juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares. Igualmente, de las que surjan entre dos o más entidades públicas de las citadas en el presente artículo.*

*Procede el juicio en materia administrativa en contra de disposiciones normativas de carácter general siempre que no se trate de leyes emanadas del Congreso. **En estos casos la demanda deberá interponerse en contra del primer acto de aplicación,** ante las salas del Tribunal de lo Administrativo...”*

En ese orden de ideas, como se advierte del numeral transcrito, el juicio en materia administrativa, resulta procedente, cuando se combatan normas generales, siempre y cuando no sean Leyes emanadas del Congreso y deberá interponerse en contra del primer acto de aplicación, siendo que la parte actora, precisó como actos administrativos impugnados, la determinación del cobro de derecho del refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma del ejercicio fiscal **2019 dos mil diecinueve**, contribución que se encuentra prevista en el numeral 23, fracción III, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve la cual resulta ser una norma de carácter general y en el particular es procedente el juicio de nulidad contra dichos actos, ya que el actor con la impresión de adeudo vehicular, acreditó estar en la hipótesis del supuesto señalado en el presente párrafo.

V. Resultan **procedentes** los conceptos de impugnación expresados por [REDACTED], contenidos en su escrito inicial de demanda, por lo que de conformidad a lo dispuesto por las fracciones II y IV de los artículos 74⁶ y 75⁷ de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, procede **declarar la nulidad** de las actas de notificación de infracción folios **4401**, relativa al folio **17213032018004401** y **038186** relativa al folio **2032509201838186**, elaboradas por personal adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, por otro lado resulta **procedente el cobro del mínimo del pago del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma del ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve**, actos que recaen sobre el vehículo con placas de circulación [REDACTED].

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 de la normatividad invocada en el párrafo que antecede, se procede al examen de las causas de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución combatida y más benéfica para el accionante, atento al citado dispositivo legal así como a la tesis que aquí se inserta:

“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE

⁶“Artículo 74. La sentencia definitiva podrá:

- I.;
- II. Declarar la nulidad de la resolución o acto combatido;”

⁷ “Artículo 75. Serán causas de anulación de una resolución, de un acto o de un procedimiento administrativo:

- I.,
- II.,
- III.,
- IV. La omisión o incumplimiento de las formalidades que legalmente debe revestir la resolución o el acto, cuando afecte las defensas del particular y trascienda el sentido de la resolución o acto impugnado;



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR. *En el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, para otros efectos.* (Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Tesis: VIII.1o.86 A. Página: 1828).

En atención a los numerales y Jurisprudencia señalada, se procede al análisis de los conceptos de impugnación que vierte en su escrito inicial de demanda, mediante los cuales, substancialmente señala que los actos controvertidos no le fueron debidamente notificados, asimismo, señala que el pago de derechos por el servicio de refrendo anual de placas vehiculares, violenta el principio de proporcionalidad tributaria, lo que provoca una desproporcionalidad al establecer la tarifa tomando en cuenta el tipo de vehículo, por lo que considera que deberá declararse la nulidad de dichos actos.

Al manifestarse a lo anterior, el representante legal de la Secretaría de la Hacienda Pública, en su escrito de contestación de demanda recibidos por este Tribunal el 6 de enero de 2020 dos mil veinte, señala que resulta infundado e ilegal lo aducido por el actor en su demanda, en lo que refiere que el derecho estatal de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma del ejercicio fiscal 2019, previsto en el artículo 23 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, contraviene lo dispuesto por el artículo 31,

fracción IV constitucional, debido a que viola el principio de equidad y proporcionalidad tributaria, al establecer cuotas distintas por servicios análogos, sin que exista relación entre la cuota establecida y el costo total que para el estado representa la prestación de dicho servicio público.

Por su parte, el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, quien compareció en representación y sustitución de la autoridad demandada, -Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, en su escrito de contestación de demanda recepcionado por este Tribunal el 10 diez de enero de 2020 dos mil veinte, (fojas 31 a 35), que los folios impugnados se encuentran apegados a los requisitos de validez que deben revestir todos los actos administrativos contenidos en los artículos 12 y 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

En ese tenor, derivado de los argumentos establecidos en párrafos anteriores, se considera que le asiste la razón al accionante cuando refiere que las cédulas de notificación de infracción impugnadas, violentan las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no le fueron notificadas, no obstante que la autoridad emisora se encuentra obligada a ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 377, así como por la fracción III, del artículo 378, del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en los cuales se establece que en caso de que el conductor no se encuentre en el lugar del vehículo, el agente vial procederá a elaborar la cédula de notificación correspondiente y la dejará en un lugar visible y seguro del vehículo, con independencia de los motivos que hayan generado el levantamiento de la misma, así como aquella que sean detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se harán constar en la cédula de notificación de infracción, así como que la misma deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los sesenta días naturales posteriores a su levantamiento, en el domicilio que aquél tenga registrado ante la Secretaría en materia fiscal en el Estado.

También se precisa en ese dispositivo legal, que en el caso de las notificaciones por correo certificado, si el domicilio se encuentra cerrado y nadie responde para la entrega del documento, se realizará una segunda visita por parte del servicio de correspondencia; no obstante lo anterior, si no es posible recabarse la firma del destinatario, se atenderá la diligencia con quien en su nombre lo reciba o si éstos no se encuentran en el domicilio, se levantará constancia de ello; es necesario precisar que la parte actora en su escrito inicial de demanda, manifestó que no le fue notificado de los actos combatidos de manera personal; y, si se toma en consideración que del contenido de las propias cédulas de notificación de infracción se advierte que a la fecha de emisión de las mismas, se excedió en demasía el término de 60 días naturales a partir del levantamiento de las infracciones, que la autoridad demandada tenía para notificarlas; quedando de manifiesto que se actualiza un estado de inseguridad jurídica e indefensión,



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

al no haber sido legal y debidamente notificada, toda vez que constituye un derecho de los particulares y una garantía de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración pública, por lo que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento, así como la garantía de legalidad y seguridad jurídica resguardadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia **declarar la nulidad** de las cédulas de notificación de infracción controvertidas; sustenta lo anterior el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación:

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. *La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.”* (Octava Época. Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI. Mayo de 1992. Tesis: P.LV/92. Página: 34).

Así entonces, aun cuando se trata de una omisión formal, debe declararse la nulidad lisa y llana, en virtud de que la ausencia de notificar personalmente al actor, no es sujeta de redimirse, ya que los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos impugnados ocurrieron en forma accidental con anterioridad, de manera que no pueden reincorporarse a la actualidad y por tanto, tampoco pueden servir de base para imponer nuevamente la sanción, dada la imposibilidad física y material de repetir esos sucesos y notificarlos de manera personal al infractor.

Por otro lado, se estima **fundado** el concepto de nulidad en el que la parte actora refiere que los conceptos relativos al **refrendo anual** de placas vehiculares para el ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve, violenta el principio de proporcionalidad en materia tributaria, como se analizará en párrafos precedentes.

Se estima necesario ilustrar que, como contribuciones, los derechos se encuentran sujetos a los principios constitucionales en materia fiscal, inmersos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

“Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: ...

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

En materia de los derechos por servicios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, en vista del respeto a los principios constitucionales en materia fiscal de equidad y proporcionalidad tributaria, para fijar el monto de tales derechos, debe atenderse al objeto real del servicio prestado por el ente público y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

Se invoca la jurisprudencia siguiente:

“DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. *Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los*



impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos".(Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Jurisprudencia 196934, Página: 41.)

Es preciso puntualizar que la proporcionalidad en las contribuciones establecidas por un servicio prestado por el gobierno en su carácter de persona de derecho público, en la actualidad se entiende no como el costo exacto o aproximado, a una contraprestación otorgada por el pago de una cuota y en función de la capacidad económica de los causantes del servicio solicitado, sino en función de la interdependencia razonable entre el monto del pago de una cuota y el servicio prestado por el gobierno en uso de una función administrativa.

En ese sentido el numeral 23, fracción III, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve, establece:

**“LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 DOS MIL
DIECINUEVE.**

Artículo 23.- Por los servicios que preste la Secretaría del Transporte y, en su caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

III. Por refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y

remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas:

- | | |
|---|------------|
| a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques: | \$590.00 |
| b) <i>Motocicletas:</i> | \$168.00 |
| c) <i>Placas de Demostración:</i> | \$1,431.00 |

De lo anterior, queda de manifiesto que el numeral 23, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve, violenta los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV⁸, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que por el servicio de refrendo anual de registro y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, servicio particular y público, así como motocicletas y autos eléctricos, se establecen **tres tarifas diferentes atendiendo al tipo de vehículo**, situación que no atiende al costo de la actividad que el Estado desarrolla para prestar el servicio público, de refrendo anual de registro y holograma, aunado a que tampoco se advierte motivación jurídica alguna que justifique la diversidad contributiva en el pago de los citados derechos; sin que ello signifique que se encuentre relevado de su obligación constitucional contenida en el artículo 31, fracción IV⁹, de nuestra Carta Magna, en el sentido de que es necesario que todos los gobernados contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva y tratándose de la contraprestación que debe cubrir un ciudadano por un servicio que le preste el Estado, se traduce que todos los individuos que se sitúen en una misma hipótesis normativa paguen la misma tarifa por el servicio prestado, en el caso concreto por la obtención de la tarjeta de circulación la tarifa señalada para ese servicio no debe atender a factores ajenos a la actividad técnica que debe desplegar el Estado, como lo es el tipo de vehículo.

Por lo que, para **determinar** las cantidades que debe cubrir el contribuyente, por concepto de refrendo anual y holograma, la autoridad demandada -Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, atendiendo a los lineamientos expuestos en el presente considerando se deberán determinar los montos a cubrir por concepto de derechos por refrendo anual y holograma, atendiendo a la **tarifa mínima** establecida en el numeral 23, fracción III de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve, es decir **\$168.00** (ciento sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional).

⁸ *Ibid.*

⁹ *Idem.*



Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan:

“DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. *Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: “CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.”, se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la*

jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." (Época: Décima Época. Registro: 2000775. Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Mayo de 2012, Tomo 2, Tesis: 2a/J.29/2012 (10a.).

En consecuencia, resulta procedente el cobro del mínimo del pago de derechos por concepto de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma **para el efecto** de que la autoridad demandada determine las cantidades a pagar por el concepto de Derecho Anual de Tarjeta de Circulación y Holograma, atendiendo a la **tarifa mínima** establecida en el numeral 23, fracción III de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve.

Resulta aplicable por analogía la siguiente tesis emitida por los órganos del Poder Judicial de la Federación:

DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO DE LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO. *El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, considera que los preceptos legales indicados violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto prevén el monto de derechos por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de*



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

registro y holograma. En congruencia con ese criterio, y con el fin de imprimirle mayor seguridad jurídica, atento a lo previsto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar las consecuencias jurídicas que conlleva la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas generales citadas, cuando se impugnan en amparo directo, con motivo de su aplicación en una sentencia definitiva que declaró la validez legal de los créditos fundados en tales preceptos, a saber: I. El tribunal responsable deberá dejar insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar, emitir una nueva en la que decrete la nulidad de los créditos fiscales por los conceptos indicados, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2011 a 2015, respecto del vehículo propiedad del quejoso; y, II. Los efectos de dicha nulidad deberán de atender al vicio de inconstitucionalidad detectado, ordenando a la autoridad administrativa demandada que emita una nueva resolución en la que inaplique la porción normativa que resultó contraria al texto constitucional, empero, vinculándola a cuantificar los derechos por esos servicios en función de la tarifa más baja. En adición a ello, es menester precisar de manera enunciativa, que el otorgamiento del amparo en esos términos, no podría tener el alcance de impedir la aplicación presente o futura de las disposiciones mencionadas en perjuicio del quejoso, ni servir de sustento para anular u obtener la devolución de sumas pagadas como consecuencia de actos diferentes, sean previos o posteriores a los créditos indicados". (Época: Décima Época. Registro: 2016854. Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Mayo de 2018. Tesis: PC.III.A. J/42 A (10a.).

De esta manera, al haberse declarado la nulidad del refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma de los ejercicios fiscales 2017 dos mil diecisiete al 2019 dos mil diecinueve, para los efectos precisados en párrafos que anteceden, lo procedente es **declarar la nulidad** de la Imposición de Multa y Requerimiento del pago del Derecho de Refrendo anual de Tarjeta de Circulación folio **M419004084657**, con su respectiva acta circunstanciada de notificación, al encontrar su origen en actos viciados. Se invoca

al efecto la tesis emitida por Órganos del Poder Judicial de la Federación, consultable bajo el Número de Registro 252,103 del Semanario Judicial de la Federación, página 280, cuyo epígrafe refiere:

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.”

Bajo las argumentaciones vertidas, se considera innecesario entrar al estudio de los demás conceptos de anulación y pruebas aportadas al sumario que hacen valer las partes, porque su estudio sería innecesario al no influir en la variación del sentido de esta resolución, en términos del criterio Jurisprudencial que dice:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES INNECESARIO SU ESTUDIO, CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA SENTENCIA RECLAMADA ES SUFICIENTE PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, para sustentar el sentido de la resolución reclamada, expresó diversas consideraciones, las cuales resultan autónomas o independientes entre sí y suficientes cada una de ellas para regir su sentido, la ineficacia de los conceptos de violación tocantes a evidenciar la ilegalidad de alguna de tales consideraciones, hace innecesario el estudio de los restantes, pues su examen en nada variaría el sentido de la resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna para que dicha consideración sustente por sí sola el sentido del fallo.” (Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV. Mayo de 2007. Tesis: IV.2º.C.J/9. Página: 1743).



Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 47, 72, 73, 74, 75, 76, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye la presente controversia, de conformidad con los siguientes:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO [REDACTED], parte actora en el presente juicio, **desvirtuó** la legalidad de los actos administrativos impugnados.

SEGUNDO. Se **declara** la **nulidad** de las actas de notificación de infracción folios **4401**, relativa al folio **17213032018004401** y **038186** relativa al folio **2032509201838186**, elaboradas por personal adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, así como de la Imposición de Multa y Requerimiento del Pago del Derecho de Refrendo Anual de Tarjeta de Circulación folio **M419004084657**, con su respectiva acta circunstanciada de notificación, impuestas al vehículo con placas de circulación [REDACTED], por los motivos y razonamientos expuestos en el último considerando del cuerpo de la presente resolución.

TERCERO. Se **declara** la **nulidad** del pago de derechos por concepto de **refrendo anual** tarjeta de circulación y holograma, **para el efecto** de que la autoridad demandada determine la cantidad a pagar por el concepto del pago del derecho de refrendo anual de Tarjeta de Circulación y Holograma, atendiendo a la **tarifa mínima** establecida en el numeral 23, fracción III, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve, es decir **\$168.00** (ciento sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), actos que recaen sobre el automotor con placas de circulación [REDACTED], por los motivos y razonamientos expuestos en el último considerando del cuerpo de la presente resolución.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así lo resolvió el Magistrado JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL, Presidente de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, actuando ante la presencia del Secretario de Sala JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS GAYTÁN, quien autoriza y da fe.

EL MAGISTRADO PRESIDENTE

JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL

EL SECRETARIO DE LA SALA

JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS GAYTÁN

JLGM/JFCG/cnrg

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y reservada que deberán observar los Sujetos Obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente”.